

# EL TARIFEÑO.

SUPLEMENTO AL NÚMERO 43.

## ADVERTENCIA

Como muestra de deferencia á nuestros suscriptores y considerando documento útil y curioso para todo tarifeño la R. O. de 1.<sup>o</sup> de Septiembre del presente año, que á continuación insertamos íntegra, sobre la liquidación del túnel hemos tenido gusto en la emisión de este suplemento, que regalamos á los mismos, cuyo texto es el siguiente:

## EL ARROYO DE TARIFA

### LA REAL ORDEN.

Como en esta ciudad es asunto que interesa mucho el recurso que ha motivado la Real orden que vamos á copiar, creemos de actualidad su inserción.

Dice así:

«Visto el expediente y recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Tarifa contra la providencia de V. S. fecha 29 de Marzo último, que revocó un acuerdo de la indicada Corporación, en virtud del cual no se conformó esta con la liquidación practicada por el Arquitecto Inspector de las obras de desviación del arroyo que atraviesa dicha ciudad:

Resultando que, verificadas las obras de referencia de que es contratista doña Carmen Rojas y llevada á cabo la liquidación mencionada por el Arquitecto Inspector de aquellas, ese Gobierno Civil, á consecuencia de instancia del referido contratista y de informes de la Alcaldía, Arquitecto Inspector de las obras y Comisión Provincial, de los que aparecía que no se había sujetado la construcción á lo prescrito en el contrato celebrado y á lo dispuesto en la legislación vigente, ordenó al Ayuntamiento, que lo prescrito en la Ley de obras públicas, R. D. de 8 de Enero de 1870 y R. O. de 23 de Enero de 1872 y 1.<sup>o</sup> Octubre de 1876, que nombrase al Ayuntamiento en el término de diez días Arquitecto ó Ingeniero que hiciese la liquidación y medición de las obras pues lo contrario verificaría ésta el Ingeniero Jefe de la Provincia.

Resultando que, transcurrido el plazo fijado y nombrado por V. S. el Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia para que llevase á cabo la liquidación citada, verificase esta arrojando favor del contratista un saldo menor el que resultaba de la liquidación practicada por el Arquitecto, puesto que verificada por este, ascendía á pesetas 58.003 con 38 céntimos y en la del Ingeniero se elevaba solo á 15.660 pesetas con 80 céntimos.

Resultando que, aprobada por el Ayuntamiento la liquidación verificada por el Ingeniero Jefe de Obras públicas nombrado para el caso por ese Gobierno de Provincia y notificando tal acuerdo al contratista, alzose este del mencionado acuerdo del Ayuntamiento para ante V. S. manifestando que la Corporación Municipal, interpretando erróneamente el contrato quería atribuir fuerza de obligar á una liquidación practicada por un Ingeniero civil, distinta y en discordia con la que verificó el Arquitecto Inspector de las obras, único llamado á verificarla por el art. 12 cap. 4.<sup>o</sup> del pliego de condiciones que rigió para la subasta, y además pretendía que como contratista la examinase y se conformase ó la impugnase, siendo así que en la repetida liquidación no ha intervenido y ya tenía prestada su aprobación á la verificada por el Arquitecto que es la que está obligado á aceptar, en vista de que la indicada condición 12 expresa: que después de determinadas las obras se verificará la medición final por el Arquitecto Inspector de las mismas.»

Que, por la indicada condición: el Ayuntamiento se obligaba á estas y pasar por la medición que practicara el funcionario por él mismo designado para la inspección de las obras y que, tratándose de una obra subterránea, había que medir y liquidar por los datos tomados durante ella, medición que por lo tanto sólo pudo verificar el Inspector de las obras y no otro cualquiera, pues de lo contrario habría que proceder con los errores que se derivan de las cales y tanteos.

Que el Ayuntamiento quería basar su pretensión, en que el Gobierno Civil dispuso la inspección y medición de las obras por el Ingeniero Jefe de la Provincia, pero que como tal designación no se hizo en concepto de arbitraje, ni aunque así fuera aceptó tal arbitraje el contratista, es evidente que dicha liquidación no tiene fuerza de obligar, ni valor alguno en derecho, por lo cual y por lastimar sus intereses, suplicaba se revocase el acuerdo del Ayuntamiento, declarando que sólo tenía validez la liquidación verificada por el Arquitecto y que se procediese á la recepción definitiva de las obras y al abono de intereses al seis por ciento de la cantidad líquida que resulte en deber el Ayuntamiento al contratista, desde treinta días después del en que se dieron por terminadas las obras.

Resultando: Que pasado á informe de la Comisión Provincial el anterior recurso, lo emitió ésta, manifestando que llevando el contrato en sí una cláusula, con la prescripción que contiene la 12 ya citada, no cabía dudar que la única liquidación que debía merecer fe y producir efectos legales, era la presentada por el Arquitecto Inspector, mientras no se

pruebe que lleva en sí dolo ó falsedad, no teniendo otro objeto la mandada celebrar por el Gobierno Civil, que el de ilustrar al Ayuntamiento en la parte técnica.

Que en la memoria que acompañaba á la liquidación el Ingeniero, se expresaba que los datos adquiridos de las obras le habían servido para dibujar los planos y secciones de todas clases y poder dar de este modo una idea completa de las obras ejecutadas sirviendo de complemento los dibujos á los estados de cubicación que acompañaba la medición y valoración del túnel y obras que podría presentar deficiencias, por no haber estado encargado de la ejecución de las obras; que en la perforación de túneles y aperturas de trincheras hay elementos como los ciementos y cubicaciones de la galería de avance del túnel, que no es posible comprobarlas al hacer la liquidación de los trabajos, á no ser que durante la ejecución de las obras se halla tenido cuidado de tomar perfiles transversales exactos de los desprendimientos y de la longitud del túnel enterrado, que sirvan después de base para la cubicación definitiva; que para poder apreciar los corrimientos había observado detenidamente las bocas del túnel, tomando los perfiles de la superficie actual del terreno; y que respecto á las entivaciones había oído á varios operarios de las obras y reconocido el terreno flojo, habiendo, con los datos tomados, fijado la cantidad de metros cúbicos á los que hay que aplicar el precio especial, teniendo en cuenta el exceso de coste que representa la entivación de las galerías, de todo lo cual deducía la Comisión Provincial, dadas las afirmaciones del Ingeniero citado, hechas en la memoria presentada:

1.<sup>o</sup> Que la liquidación practicada por el Arquitecto es la única valedera, para los efectos legales del contrato, ya que este funcionario, es el designado en el pliego de condiciones, para hacer la medición final.

2.<sup>o</sup> Que el Ayuntamiento debía abonar al contratista las sumas que le adeuda, según la indicada liquidación con los intereses de demora, á razón del seis por ciento desde 30 días después de terminadas las obras con arreglo al pliego de condiciones generales de obras públicas y

3.<sup>o</sup> Que se verificase la recepción definitiva de las obras, si, como parecía, había terminado el año de garantía, con cuyo parecer se conformó ese Gobierno Civil, elevándolo á resolución en 29 de Marzo último.

Resultando que contra la anterior providencia se alzó para ante este ministerio el Ayuntamiento de Tarifa, manifestando que la cláusula del contrato citada por el contratista y la Diputación en su informe, no puede extenderse á considerar al Ayuntamiento obligado á sugatarse nece-

sariamente á unos actos que pudieran traducirse en perjuicio de los intereses que administra, y porque no iba á resultar el contratista con mayores derechos que el Ayuntamiento, pudiendo rechazar libremente lo que la corporación debiera inaneablemente admitir.

Que aun sentado tal principio, no tiene porque piegarse el Ayuntamiento á tal liquidación atendida la forma en que fue presentada, puesto que omitiendo las prescripciones de las condiciones generales de obras públicas, no se acompañaron á la liquidación las condiciones generales de obras públicas, no se acompañaron á la liquidación las copias de los planos y perfiles, que permitieran el examen y la comprobación de dichos trabajos, y que no habiéndose hecho así, no es extraño que el Ayuntamiento no aceptase un trabajo que dista mucho de aparecer válido y legalmente ejecutado.

Que no habiéndose tomado los perfiles transversales exactos, de los desprendimientos y de la longitud del túnel enterrado, el trabajo del Ingeniero está en las mismas condiciones que el realizado por el Arquitecto, puesto que aquel tuvo para formar la liquidación, los mismos datos en que se fundó éste.

Que no cabe exponer en términos de seriedad, que se ordenase al Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la Provincia, la certificación y comprobación de las operaciones realizadas por el Arquitecto, para que fuese luego desconocido su trabajo y no estuviese llamada á producir ningún efecto; más que para aumentar los gastos del nuevo trabajo facultativo, que al desconocerse la eficacia de tal trabajo, se incurre en la inconciencia de ordenarse después lo contrario de lo que anteriormente se dispuso y,

Que el artículo 12 era el mismo al dictarse la resolución, al en que se hiciera una nueva liquidación y si por virtud de la nueva providencia no es válida ni legal otra liquidación que la verificada por el Arquitecto no debió haberse ordenado la realización de un nuevo trabajo para agravar más la situación del errario municipal, por todo lo que suplica se deje sin efecto la providencia de ese Gobierno, contra la cual se acude en alzada.

Resultando: Que con fecha 10 de Junio último, esta Dirección General de Administración Local, de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 del Reglamento provincial, para la ejecución de la ley de 19 de Octubre de 1889, acordó conceder el plazo de diez días, para que durante el mismo los interesados en este expediente, alegasen ó presentasen los documentos ó justificantes que considerasen conducentes á su derecho, y habiendo en el expresado término presentado el Ayuntamiento de Tarifa, varios documentos relativos al asunto en cuestión, cuya síntesis consta ya



en el expediente, por virtud de los en un principio remitidos.

Considerando: Que en el artículo 60 del pliego de condiciones generales de obras públicas, se previene de una manera clara y terminante que, para la medición de las explanaciones, servirán de base, los planos y perfiles del replanteo, en los que se *dibujará con las medidas tomadas en las obras* la forma y disposición en que ha quedado la superficie del terreno para deducir el número de metros cúbicos de desmonte y de terrajén que ha ejecutado el contratista, y que *para la medición de las obras de fábrica, ocultas, se adoptarán las dimensiones consignadas en los planos y perfiles que habrán debido formarse precisamente durante la construcción*, y por lo tanto toda vez que según consta en el expediente, no solo por lo manifestado por el Ayuntamiento recurrente, sino por el Ingeniero designado por ese Gobierno Civil, para que verificase la inspección y liquidación de las obras, no se ha cumplido con lo preceptuado en dicho artículo 60, ya que han dejado de tomarse durante las obras, los planos perfiles y notas de que habla dicho artículo, no cabe dudar que el Ayuntamiento se encuentra en el perfecto uso de su derecho, rechazando un trabajo verificado por el Arquitecto inspector de las obras, puesto que no por ser este el funcionario designado con antelación por la Corporación municipal,

para que verificase aquel, deja este de ser menos legal é insuficiente, para apreciar en su justo valor el importe de las obras ejecutadas.

Considerando que el hecho anteriormente expuesto es el punto sustancial del asunto, puesto que sin el vicio indicado que aquí é invalida por completo el trabajo de referencia, llevado á cabo por el Arquitecto inspector, no habría lugar legalmente á otro debate ni cuestión, sino á revisar ó averiguar en último caso si las operaciones llevadas á cabo, para la liquidación, era el resultado exacto que arrojasen los datos y documentos que deben, según está prevenido, formar la base de que se parla para la medición y valoración de las obras ejecutadas.

Considerando aparte del hecho anteriormente sentado que lo afirmado por la Corporación Provincial en su informe á ese Gobierno Civil de que la liquidación verificada por la Jefatura de Obras Públicas no tiene fuerza legal ninguna, ya que no fué otro su fin que el de ilustrar más al Ayuntamiento en el asunto, no puede menos de considerarse equivocado, toda vez que ese Gobierno de Provincia, dispuso que se verificase la inspección y liquidación de las obras, por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la Provincia, no sólo en el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 101 del Reglamento para la ejecución de la Ley general de

Obras Públicas que preceptua que las de esta clase y de cargo de los Ayuntamientos serán inspeccionadas por los empleados ó funcionarios facultativos del Estado, sino además, por consecuencia de instancia del contratista y de informe de la Alcaldía de Tarifa, del Arquitecto inspector de las mencionadas obras y de la misma Comisión Provincial, por lo tanto, no cabe argüir que dicha liquidación no tuvo otro carácter que el de ilustrar al Ayuntamiento, puesto que como queda manifestado tuvo carácter oficial, y carácter á que contribuyó también la Corporación Provincial con su informe, y por lo mismo, no puede prescindirse de tal liquidación, que por el mayor cuidado puesto en la misma y los estudios y trabajos verificados para llevarlo á cabo, estudios y trabajos de que carece la verificada por el Arquitecto inspector, viene á llenar las deficiencias de que adolece ésta.

Considerando en virtud de todo lo expuesto y de que el contratista, según aparece del expediente, consintió y aceptó la providencia de V. S. decretando la nueva liquidación, que debía llevar á cabo la jefatura de Obras Públicas, toda vez que no recurrió de la misma, que la única liquidación que es firme, legal y valedera es la llevada á cabo por la citada jefatura de Obras Públicas, ya que la afirmación igualmente de la Comisión Provincial y de la contratista, de no ser

valedera otra que la verificada por el Arquitecto inspector, en atención á lo consignado en el art. 12, cap. 1.º del pliego de condiciones que sirvió de base á la subasta, por las razones expuestas, no da lugar á rebatirlas, ya que la citada condición, no puede servir para amparar ni convalidar infracciones de las leyes ni reglamentos vigentes sobre la materia.

S. M. el Rey (n. D. g.) y en su nombre la R. ma Regente del Reino, se ha servido revocar la providencia de ese Gobierno Civil y por lo tanto declarar que la liquidación de las obras de referencia, se verifiquen por la que de las mismas se llevó á cabo por la Jefatura de Obras Públicas de esa provincia.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento, el del Ayuntamiento de Tarifa y demás interesados, devolviéndole al propio tiempo el expediente de referencia. Dios guarde, etc.

Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Cádiz.

#### FES DE VIDA

Se venden en la *Imprenta Tarifeña* á 50 céntimos la docena y á 3 pesetas el ciento.

Imp. Tarifeña, San Francisco 4.